

María Elena Rubilar, Pdta. Comisión de Descentralización del Core y problemas entre gobernador y delegado:

"Vemos gran confusión en la ciudadanía que no sabe a qué autoridad recurrir"

Sebastián Mejías O.
sebastian.mejias@mercuriovalpo.cl

Como consejera regional del Frente Amplio y presidenta de la comisión de descentralización, María Elena Rubilar aborda con mirada crítica el escenario político e institucional que enfrenta la región bajo la nueva administración de José Antonio Kast. Desde su rol, desmenuza las trabas en el traspaso de competencias, así como las tensiones estructurales entre el gobernador regional y la figura del delegado presidencial, que hoy dejan a la primera autoridad electa de los territorios con un poder "excesivamente limitado".

- Para comenzar, ¿tiene usted expectativas de que se profundice el proceso de traspaso de competencias en este nuevo ciclo político o cree que podrían enfrentarse retrocesos?

- Siempre mantendremos expectativas para que la descentralización sea real, pero soy clara: hay razones para creer que este proceso puede no tener avances sustantivos. El Presidente Kast llegó con una agenda centralista, con fuerte énfasis en el disciplinamiento fiscal, retroceso en derechos y desregulación general, donde la descentralización simplemente no ocupa un lugar relevante en sus prioridades. La señal más concreta ya la vimos: doce gobiernos regionales sufrieron recortes de presupuesto, varios sobre el 5%. Sumemos el reciente recorte del 3%, lo que puede leerse claramente como un disciplinamiento territorial.

- En la actualidad, ¿qué competencias específicas se están abordando para ser traspasadas al Gobierno Regional desde el nivel central?

- Tenemos distintos frentes abiertos. El más urgente es la Ley Regiones Más Fuertes, que apunta a la autonomía fiscal y que para Valparaíso, con la gran actividad portuaria local y de San Antonio, es absolutamente estratégica. Pero respondiendo tu pregunta y por la

grave escasez hídrica regional, el Ejecutivo evalúa traspasar competencias en gestión de las APR y Servicios Sanitarios Rurales. Actualmente, conformamos el modelo de gobernanza del Área Metropolitana de Valparaíso, nacida en enero, enfocada en resolver el transporte público del Gran Valparaíso, la crisis de residuos sólidos y el ordenamiento territorial. Existe, en ese contexto, la posibilidad de solicitar nuevas atribuciones vinculadas al Área Metropolitana. Finalmente, a mi juicio, el Gobernador es quien debe presidir la Comisión Regional de Evaluación Ambiental.

“Que a más de cuarenta días de este gobierno no exista un encuentro oficial entre el delegado Millones y el gobernador es una mala señal para Valparaíso. Hay un innegable historial electoral que explica el desencuentro, pero nada justifica que no dialoguen”.

- A la luz de los hechos, ¿considera usted que en estos años el proceso de traspaso de competencias ha funcionado como esperaban?

- Ha sido un proceso incompleto, ya que no logró traducirse en una real política de Estado. Las reformas entregaron buenas herramientas, pero no dejaron un horizonte de cómo aplicarlas estructuralmente. A cinco años de elegir gobernadores, se han traspasado muy pocas competencias, e incluso once solicitudes fueron rechazadas.

- ¿Qué ha fallado?

- Fallaron tres cosas: el diseño legal no dejó clara la organización del Estado; los traspasos vinieron sin recursos ni perso-

nal, volviéndolos puramente simbólicos; y hay una profunda resistencia del aparato central a soltar su cuota de poder. Destaco como hitos las nuevas áreas metropolitanas y el histórico royalty minero. Sin embargo, la descentralización se volvió una negociación constante, lo que asfixia el legítimo mandato democrático de las nuevas autoridades electas.

- El año pasado fuimos testigos del fracaso en el traspaso de Sernatur a los Gores, con oposición de los propios funcionarios. ¿Es esta una constante que dificulta el proceso?

- El caso de Sernatur es bastante emblemático. El desarrollo turístico regional es una competencia totalmente estratégica y el plan piloto de O'Higgins da luces muy positivas de aquello. Lamentablemente, en otras zonas no corrió la misma suerte. Quizás faltó un diálogo muchísimo más profundo con los funcionarios y con los propios Gores, situación mermada por la urgencia política. Es una discusión que debe retomarse en forma, pues el turismo es motor esencial de la región, y se debe integrar la mirada de los consejeros desde el comienzo. Pero quiero ser sumamente categórica: los funcionarios públicos jamás han sido el problema de la descentralización. La falla estructural radica en el diseño institucional, más allá de la mera voluntad política.

UN PODER LIMITADO

- Pensando en el futuro y la maduración institucional, ¿qué competencias fundamentales debería asumir el Gobierno Regional en el mediano plazo?

- Tenemos cinco prioridades. Primero, necesitamos competencias de fortalecimiento para el Área Metropolitana del Gran Valparaíso, enfocándonos en la gestión de riesgos y desastres. Es la enseñanza que dejó el megaincendio de febrero de 2024. Segundo, afianzar la institucionalidad ambiental, presidiendo la Comisión de Evaluación Ambiental. Tercero, prevención del delito, con un diseño y presupuesto anclado en las demandas del territorio. Cuarto, inte-



RUBILAR CREE QUE SERÍA BUENA SEÑAL QUE GOBERNADOR PRESIDA COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

grar y potenciar el fomento productivo con materias turísticas estratégicas. Quinto, tomar el control de la gestión hídrica. En una zona con altísima escasez como Petorca, descrita internacionalmente como epicentro de violación al derecho humano al agua, resulta inapetible que las decisiones sigan tomándose en Santiago.

- Bajo la actual legislación, ¿cree usted que los gobernadores cuentan con un poder real o excesivamente limitado frente al centro?

- Tienen un poder excesivamente limitado frente a las expectativas ciudadanas, constituyendo un serio problema democrático. Rodrigo Mundaca es la autoridad regional más votada del país, pero no es jefe jerárquico de los servicios públicos locales. Peor aún, depende de la coordinación del delegado para gestiones vitales, pese a que invertimos altísimos recursos desde el Core. A esto sumamos la incertidumbre de los recortes presupuestarios de 2026 y una lenta agenda central, donde la Ley Regiones Más Fuertes avanza a paso de tortuga. A pesar del cerco institucional, los gobernadores y gobernadoras de Chile han ejercido mucho más liderazgo del que la ley estrictamente les otorga. Esa fuerza emana de su legítimo

mandato en las urnas y mantiene en pie la agenda descentralizadora.

“Doce gobiernos regionales sufrieron recortes de presupuesto, varios sobre el 5%. Sumemos el reciente recorte del 3%, lo que puede leerse claramente como un disciplinamiento territorial”.

- En este entramado administrativo, ¿representa la figura del delegado presidencial un problema para la gestión operativa y política de los gobernadores?

- Es un problema completamente estructural. La reforma del año 2017 dejó instalados dos cabezas en cada región, con atribuciones que se cruzan permanentemente, sin un órgano que dirima y con orígenes radicalmente distintos. Es la receta idónea para el conflicto permanente. Vemos a diario la gran confusión de una ciudadanía que no sabe a qué autoridad acudir, problemas de coordinación con los servicios públicos y

un constante ninguneo simbólico en emergencias. El gobierno del Presidente Boric prometió eliminarla, pero no pudo avanzar. Bajo este gobierno da la impresión que se busca mantener presencia territorial a través de los delegados. Esta dualidad representa uno de los mayores problemas de la descentralización administrativa.

- A estas alturas, ¿espera usted algo positivo de la relación entre el delegado Millones y el gobernador Munda, asumiendo que ni siquiera han concretado un encuentro formal?

- Que a más de cuarenta días de este gobierno no exista un encuentro oficial entre el delegado Millones y el gobernador es una mala señal para Valparaíso. Hay un innegable historial electoral que explica el desencuentro, pero nada justifica que no dialoguen. La región tiene problemas que no esperan: emergencias, transporte, salud y ejecución del presupuesto recortado. Lo justo es que las nuevas autoridades manifiesten su disposición para sentarse a trabajar y definir prioridades. El gobernador es la máxima autoridad regional y debe existir ese diálogo institucional. ➡